

IV Velasco Alvarado

TOMO IV

Conmemorando
52 años
de inicio del proceso
revolucionario de 1968

Octubre 2020

Héctor Béjar



REVISTA

**Imaginando el Perú
post pandemia**

Ediciones Grupo Emancipador Perú

IV
Velasco
Alvarado

1968 - 1975

VII

LA ORGANIZACIÓN POLITICA EN DEBATE*El silencioso ascenso de las multitudes hacia el poder*

Cuando las fuerzas armadas desplazaron a la oligarquía del poder político y empezaron el desmontaje de su poder económico, la tecnoburocracia y el pueblo ocuparon el terreno perdido por las clases dominantes. La tecnoburocracia con las nacionalizaciones y estatizaciones. El pueblo con las expropiaciones de tierras y empresas, con el avance de la cogestión y autogestión. Las reformas de estructura obligaban a la formación de organizaciones populares. Por eso es que el proceso iniciado en 1968 puede ser definido, no sólo como la transformación de las bases económicas en que se asentaba la estructura del poder oligárquico, sino como el más importante y coherente esfuerzo de toda nuestra historia por la organización del pueblo. En esos años surgieron miles de sindicatos, fueron creadas las comunidades industriales y organizadas las cooperativas agrarias de producción, las sociedades agrícolas de interés social, las ligas agrarias con sus federaciones campesinas departamentales, las comunidades laborales en la minería, la pesca y las comunicaciones, las brigadas de voluntarios juveniles. Y surgieron también como consecuencia de este fenómeno, dos grandes centrales de trabajadores en la ciudad y en el campo: CONACI y CNA.

El 9 de octubre de 1974 el presidente Velasco declaraba que durante seis años ... *se han formado 40 sociedades agrícolas de interés social, 1,300 cooperativas de producción y de servicios, 22 centrales de cooperativas, 133 comunidades campesinas reestructuradas, 57 asociaciones de conductores directos de tierra, 36 asociaciones de campesinos sin tierras, 1,700 organizaciones campesinas de base, 123 ligas agrarias departamentales, 3,400 comunidades industriales, 50 comunidades de telecomunicaciones, 67 comunidades mineras, 253 comunidades pesqueras, 700 pueblos jóvenes y 13 mil comités vecinales, aparte de centenares de sindicatos y núcleos educativos comunales.*

Las cooperativas agrarias de producción controlaban toda la producción azucarera del país, en esa época importante renglón de exportación, unos dos tercios de nuestra producción de alimentos agrícolas y casi todas las mejores tierras de la costa. Las ancestrales comunidades campesinas, agrupadas en las sociedades agrícolas de interés social o trabajando en su tradicional forma asociativa, recuperaron tierras que les fueran arrebatadas por el latifundismo. Parte importante del campo fue cooperativizada y la sociedad rural cambió de faz como primer resultado de la reforma agraria. Y el resto de las industrias urbanas de propiedad privada, la industria extractiva minera del Estado, la pesquería y las

telecomunicaciones, éstas últimas también nacionalizadas, la cogestión avanzaron hasta antes que la restauración oligárquica iniciada por Morales Bermúdez paralizó dicho avance. En la industria, las empresas que habían sido descapitalizadas y quebradas por sus dueños fueron reconstituidas por sus trabajadores bajo la forma autogestionaria. En los cinturones de miseria de las ciudades más importantes del país, los pobladores, estimulados por el gobierno, se organizaron en comités vecinales por manzana para resolver sus problemas de servicios. Organizaciones de trabajadores urbanos y rurales también participaron en



los núcleos y consejos educativos comunales y al promediar 1974 empezaban a participar en las unidades de planificación de base y los comités de desarrollo para intervenir en la distribución y asignación de recursos del Estado. Por efecto de la nueva efervescencia que vivía el país y el movimiento de ascenso popular, durante los primeros años del proceso revolucionario, los trabajadores organizaron y lograron el reconocimiento de un número de sindicatos que sobrepasa al total de los que habían existido hasta entonces a lo largo de toda nuestra historia republicana.

Éste fue el movimiento popular organizado más grande y masivo de nuestra historia, pues agrupó a unos cuatro millones de campesinos, tres millones de pobladores urbanos y doscientos mil trabajadores industriales, sin contar con las numerosas organizaciones que en proceso de creación, como las nuevas empresas de propiedad social, algunas de las cuales comprendían a varios miles de personas. El movimiento se sumó a las organizaciones populares tradicionales, integrándolas y respaldándolas en la lucha por sus reivindicaciones económicas y sociales.

Vistas desde un ángulo crítico, estas organizaciones tenían limitaciones, defectos y vacíos de todo orden. Como decimos en otra parte de este mismo libro, las cooperativas agrarias estaban lejos de ser modelos de participación. Antes bien, eran una institución que ya no correspondía a las nuevas realidades que la propia revolución fue creando. La cogestión en las empresas industriales fue abiertamente sabotada por los capitalistas y el gobierno de Morales Bermúdez la convirtió en una imitación del accionariado difundido; el de Belaunde la desapareció. Las empresas fabriles administradas por los trabajadores quedaron en triste situación, boicoteadas por funcionarios estatales partidarios de la inversión privada y bajo la permanente amenaza de jueces venales. En las comunidades mineras y pesqueras no existió nunca una participación real. Los comités vecinales languidieron por falta de apoyo del Estado para después ser manipulados y desaparecer. Al no contar con la participación de las organizaciones populares los consejos educativos comunales quedaron en manos de funcionarios del Estado o de organizaciones conservadoras como los “leones” o “rotarios”. Y muchos de los nuevos sindicatos no lograron superar su primera infancia o cayeron bajo la tutela de funcionarios públicos o de activistas de los partidos políticos reformistas.

Durante los siete años de Velasco, debido a la efervescencia que vivía el país, y al avance del proceso revolucionario, éste era un movimiento lanzado, a pesar de todas las dificultades, hacia el poder real. Los cooperativistas empezaron a debatir los problemas de la producción, aprendieron a manejar recursos, a planificar, incluso a administrar zonas del territorio nacional. En muchas empresas los trabajadores y sus delegados aprendieron a vivir sin la tutela del patrón o en contradicción con la tutela del Estado. Mientras existió la cogestión en las empresas de propiedad privada reformada, los trabajadores lucharon por el acceso a los “misterios” de la contabilidad capitalista, tan celosamente guardados durante años y años de explotación por las clases dominantes. Muchos comités vecinales empezaron a plantear su participación en los gobiernos locales, mientras otros la ejercían en la práctica. En las postrimerías de los primeros siete años del proceso peruano, ya era inminente el reemplazo de la vieja institución municipal, gobierno local de personas “notables” heredado desde la colonia, por gobiernos locales de carácter popular.

En general, más allá de cada empresa, de cada organización, los trabajadores comenzaron a percibir la falsedad de la pretendida “racionalidad” de un sistema que se negaba a morir. Descubrían las relaciones entre los diversos entes económicos del capitalismo. Iban tomando conciencia de un mundo que desconocían, pero cuyas leyes y consecuencias habían padecido por generaciones. En estos términos, el proceso peruano puede ser descrito como una progresiva acción de tenazas contra la vieja estructura oligárquica: por arriba, las fuerzas armadas desalojaban del poder a las clases dominantes; por abajo, se movilizaba el nuevo y ascendente poder popular.

Por su dispersión en centenares de empresas, barrios o localidades, el avance de estos grandes grupos hacia el poder no siempre adquiriría los caracteres de una toma de conciencia política, si entendemos por tal la capacidad de imaginar globalmente los problemas del país y la lucha generalizada para la superación de un sistema explotador. Pero cuando los trabajadores conducían sus empresas y tenían que enfrentarse a la maraña del mundo capitalista, no tardaban en percibir la potencia de sus propias fuerzas. Lo que no siempre sucede cuando se limitan a pedir aisladamente reivindicaciones salariales o económicas, sin discutir el derecho de los capitalistas a detentar la propiedad de los medios de producción y a disfrutar de su plusvalía.

El ascenso de esta marea popular en condiciones tensas, pero pacíficas, sin generar una reacción violenta de las clases dominantes, era posible porque las fuerzas armadas actuaron como protectoras vigilantes del nuevo curso mientras éste se realizaba. Con su presencia, ellas desalentaban cualquier oposición abierta. Sin embargo, no dejaron de ejercer un doble papel: disuadían a los enemigos del movimiento popular que crecía bajo su protección, pero al mismo tiempo trataban de ponerlo bajo su control, cuando no lo controlaban realmente a través de incontables organismos del Estado. Mientras estuvieron dirigidas en parte por oficiales revolucionarios, las fuerzas armadas asumieron de hecho la orientación y dirección del proceso, a la vez que estimulaban y fiscalizaban a las organizaciones populares. Es decir, cumplieron en cierta manera el rol que corresponde a los partidos políticos revolucionarios cuando toman el poder e inician la transformación de la sociedad.

Y es que las circunstancias históricas y su propia decisión colocaron a las fuerzas armadas en la vanguardia del proceso. Pero dentro de ellas, la cuestión del poder no se había resuelto. Como toda institución castrense, las fuerzas armadas peruanas tienen sus propias limitaciones y contradicciones y llevan dentro de sí sectores recios a los cambios sociales. Ellas ejercían el poder institucionalmente, lo que colocaba de facto a todos sus oficiales de cierta jerarquía, sin distinción de ideas políticas, independientemente de que estuvieran de acuerdo o no con la transferencia del poder, en la dirección de asuntos claves para el país.

¿Qué hacer en esta situación? No podía esperarse que la suerte de la revolución en instancias decisivas descansara exclusivamente en los cuadros militares. Los vacíos creados por los altibajos de la conciencia revolucionaria castrense debían ser llenados por los sectores populares. Tanto la defensa inmediata del proceso, como la culminación de sus objetivos históricos, sólo podía ser garantizada por la existencia de una organización masiva y consciente, en todos sus niveles, de la importancia de los cambios que estaban ocurriendo y, por tanto, de la necesidad de arriesgar la tranquilidad, y aún la vida, para mantenerlos y profundizarlos. Había que generar entonces más y más organización. Por su propio peso,



las organizaciones populares podían ir imponiéndose como válidas interlocutoras del poder militar hasta transformarse en el factor revolucionario decisivo. Este camino no podía ser recorrido sin las dificultades, obstáculos y contradicciones que estas páginas registran en parte. Pero, en las circunstancias del proceso peruano, era el único camino posible.

La socialización de lo político

Para que esta estrategia pudiese cumplirse había que llenar un primer requisito: las grandes organizaciones de base debían hacer política. En las sociedades dominadas, el pueblo es apartado de la política por las clases opresoras. Esta es inalcanzable para las gentes sencillas o está desprestigiada porque se la identifica con los malos manejos de los políticos profesionales. Pero sólo representantes de las clases dominantes la ejercían mayoritariamente en el Parlamento, el ejército, la administración pública y los partidos burgueses. Por su parte, y porque viven en una sociedad de dominación, los trabajadores no tenían acceso a los conocimientos ni las técnicas de interpretación necesarias para explicarse las razones de su estado de marginación y la posibilidad y necesidad de cambiarlo. En muchas sociedades capitalistas, particularmente en las subdesarrolladas, son hombres de los grupos medios instruidos o los trabajadores más avanzados, quienes se organizan por su cuenta para llevar a cabo una lucha política con el fin de transformar tal estado de cosas. En ese caso, la prédica que hacen los revolucionarios precede a la lucha por el poder o marcha con ella. En el caso peruano, la conciencia popular se incrementaba además como consecuencia del ejercicio del poder, allí donde éste era ejercido parcial o totalmente por las organizaciones populares. Para lograr que esta toma de conciencia que se iniciaba en los grupos dirigentes, se expandiese y abarcase a capas más numerosas de la población, no sólo había que dar más

poder al pueblo. Eso se iba logrando con el avance de la revolución en la expropiación de los medios de producción y su transferencia al pueblo. *El ejercicio de la política también debía ser expropiado a las clases dominantes para ser transferido a las organizaciones populares.*

Por eso es que, como lo indicaba Carlos Franco en *La Revolución Participatoria*, la tesis de la socialización de la política era consustancial a la revolución peruana. Dicha tesis parte del principio de que la política no puede ser una actividad exclusiva de algunas personas ilustradas y entrenadas y excluyente de la mayoría, sino que constituye un derecho de todos los trabajadores. Así, por la vía de la participación podía lograrse que las organizaciones asuman progresivamente las funciones del Estado, transformándolas, absorbiéndolas y socializándolas. En las específicas condiciones del proceso revolucionario peruano, ése podía ser un camino viable para la conversión del Estado oligárquico tradicional en un Estado revolucionario.

Partido o Participación

Planteado así el problema, la aparición de un partido político de la revolución podía devenir en la sustitución de la participación política del pueblo por la intervención exclusiva de lo grupos “politizados”. El tema del partido fue uno de los más discutidos y tuvo ardientes defensores y detractores. Como ha sucedido más de una vez en el mundo, la polémica quedó trunca por los hechos, pero continúa pendiente y vale la pena regresar sobre ella.



El papel del partido en las revoluciones se presta para conclusiones que tienen una premisa de enorme peso argumental: dentro de cada uno de los procesos revolucionarios contemporáneos ha existido siempre el partido como la organización que ha permitido nuclear a los elementos transformadores de la sociedad, encuadrarlos casi militarmente, detrás de un equipo dirigente y un programa. Así, el partido ha sido un instrumento aparentemente insustituible para tomar el poder político y mantenerlo a todo trance en las etapas más duras de reacción contrarrevolucionaria.

Es claro que no todas las revoluciones fueron iniciadas por partidos sino por diversos tipos de organización, incluidos los ejércitos revolucionarios o las guerrillas que emprendieron, como en Cuba y ciertos países de Asia y África, la lucha militar contra el poder opresor. Y por otro lado suman decenas los ejemplos de partidos reformistas que, antes que instrumentos para la toma del poder se convirtieron en moderadores o apaciguadores de las tendencias radicales, interlocutores más o menos pacíficos de las clases y grupos dominantes y, en general, en instituciones que forman parte del sistema: La presencia de un partido no es de por sí garantía del triunfo sin otras condiciones externas o internas que favorezcan o precipiten su victoria. ¿Habría sido el partido de la revolución peruana acelerador de ésta u obstáculo para sus cambios más profundos y duraderos? ¿Podría ser un partido en las condiciones que se dieron en el Perú entre 1968 y 1975, impulsor de nuevas transformaciones o más bien precipitante de la acción contrarrevolucionaria que operó sorda pero activamente a todo nivel?

Es muy grande aún el atraso de nuestro país y, por tanto, un gran bagaje de conocimientos y técnicas políticas continúa concentrado en el poder de los grupos medios ilustrados de izquierda y derecha. Algunos grupos y partidos de izquierda jugaron un papel positivo en la lucha por nuestra liberación nacional, pero continuaban siendo minoritarios y estaban aislados de las mayorías nacionales. Los nuevos sectores ganados por la revolución, a pesar de su dinamismo y entusiasmo, no habían ingresado a una alta conciencia política. En esas condiciones no eran muchos los cuadros revolucionarios militantes con quienes se podía contar en cada centro de trabajo. La aparición de una organización partidaria de tipo tradicional obligaba a agrupar en células, núcleos, comités u organismos similares, a trabajadores de fábricas, residentes de barrios, artesanos, empleados, pequeños propietarios, cooperativistas y comuneros, campesinos, estudiantes, intelectuales, etc., indistintamente. Organizados fuera de sus centros de trabajo, estudio o residencia, el resultado hubiese sido extraer su actividad fuera de la base popular. Lo que en otros momentos históricos cuando se lucha subterráneamente o bordeando la legalidad para tomar el poder, es positivo o en todo caso inevitable, en el Perú de 1968-75 equivalía a tomar un desvío. Este nucleamiento heterogéneo habría divorciado a cada militante de su actividad real, convirtiendo la vida política del pueblo en una ilusión: los miembros de cada núcleo no podrían opinar con

conocimiento acerca de problemas que ellos no vivían. En la pretensión de orientar y dar directivas se habrían convertido pronto en portavoces de la verdad del partido ante las bases populares; pero no podrían ser portadores de la verdad de las bases ante el partido. Y en los momentos que vivía el Perú, nada podía reemplazar la riquísima y renovada experiencia que estaban haciendo cientos de miles de personas a partir de las tareas de la revolución.

El camino peruano hacia una sociedad burocrática

¿Y quiénes hubiesen sido desde el primer momento los dirigentes de estos organismos y los líderes del partido? Sin duda, las personalidades civiles y militares más “esclarecidas” y con más influencia en el poder. Esto, que iba a parecer muy justo y alentador a primera vista implicaba sin embargo que el pueblo organizado iba a ser dirigido por grupos que eran finalmente ajenos a sus intereses históricos. Se hubiese establecido así una relación de subordinación que, partiendo de la dirección militar de la revolución, pasaba por el poder civil de la tecnoburocracia, continuaba con los hombres y mujeres del pueblo más decidida y activamente ganados por la revolución y terminaba en la base popular. Una relación que se hubiese consolidado e institucionalizado a despecho de cualquier esfuerzo en contrario y que iba en la dirección opuesta a aquella que la revolución planeaba. No sólo el centro de las decisiones hubiese continuado fuera y por encima de las organizaciones, y no dentro de ellas como quería la revolución, sino que los propios trabajadores militantes habrían devenido en simples portavoces o ejecutores de órdenes emitidas desde arriba.

Impulsar la formación de un partido de organización tradicional en esos momentos, equivalía pues a prolongar la burocratización del régimen ya burocrático en dos niveles. El surgimiento de una capa de dirigentes políticos que centraban su actividad en el aparato partidario convertía a éste de medio en fin, de instrumento en objetivo. Eso a nivel medio. Y en el nivel alto, la burocracia estatal peruana, disfrazada de “revolucionaria” por conveniencia, habría usado el partido como un brazo político para asegurar su perpetuación en el poder.

Partido oficial, espejo del poder

El proceso revolucionario fue impulsado hacia adelante por un complejo juego de fuerzas manejado con mano firme por el presidente Velasco en un doble registro que comprendía tanto al propio consejo de ministros y los altos círculos gubernamentales como a los mandos claves de las fuerzas armadas. Pero eso lo obligaba también a ajustar aquí y conceder allá, en el lógico afán de mantener la coexistencia de todas las tendencias mientras la revolución avanzaba. Por eso, como quedó demostrado en los varios intentos de organización política

que se hicieron en el transcurso de 1968 a 1975, cada uno de ellos reflejó el estado de evolución y la correlación que existía entre las fuerzas que operaron en el poder o cerca de él en cada uno de los momentos del proceso revolucionario.

Obsesionados por la urgencia de dar una respuesta política a las agresiones de la oposición, sin haber analizado aún los mitos de la organización partidaria, hubo quienes hicieron, con diversos signos y auspicios, y diferentes características, varios intentos de organización política: los comités de defensa de la reforma agraria, transformados después en comités de defensa de la revolución, bajo el estímulo de funcionarios del ministerio de Agricultura; los comités de organizaciones populares y el Movimiento de la Revolución Peruana MRP, surgidos fugazmente como consecuencia de los sucesos de febrero de 1975; y el Movimiento Laboral Revolucionario MLR, auspiciado por el ministerio de Pesquería. Algunas de estas iniciativas nacieron en medio del entusiasmo pero fueron infiltradas por toda suerte de oportunistas; otras respondían a la manipulación orquestada de tendencias macartistas. Siempre fue imposible ponerlas a salvo del oportunismo que atraviesa y corroe la sociedad peruana.

Con un gran partido oficial, este fenómeno se habría reproducido muchas veces. Los prefectos, subprefectos, alcaldes y gobernadores, los miembros de prominentes círculos adinerados cercanos al poder en el gobierno y las provincias, los integrantes de mafias sindicales, se apresurarían a afiliarse a una organización gobiernista para disfrutar de los favores oficiales. Mientras tanto, en las alturas, los intereses de los trabajadores se verían disminuidos hasta quedar reducidos a pequeños puntos de referencia en el gran juego de las concesiones que siempre se realizan para mantener el equilibrio de todo gobierno donde la cuestión del poder no se ha decidido aún entre la revolución y el conservadurismo. La lucha ideológica en el seno de tal organización iba a ser emprendida en las peores condiciones por una izquierda que tampoco había evolucionado lo suficiente en unidad, en comprensión del proceso en que estaba inmersa, madurez para sopesar las dificultades y experiencia para sortearlas. El camino más probable para tal organización era el confusionismo, cuando no la derrota de las mejores fuerzas del proceso bajo el peso del conservadurismo.

Por todas estas razones, el presidente Velasco decía el 24 de junio de 1971 en un discurso pronunciado en la División Blindada: *No es nuestra intención propiciar la formación de un partido político adicto al gobierno revolucionario. Sabemos muy bien que el proceso revolucionario debe plasmarse en una real transferencia de poder hacia los sectores mayoritarios del país.... Y para garantizarlo de manera efectiva es preciso que desde ahora los hombres y mujeres de nuestro pueblo empiecen a ejercer su poder de decisión sobre todos aquellos aspectos de nuestra vida que afectan su destino.... Sólo así podremos estar seguros de que el pueblo hace suya esta revolución. Y sólo así podremos*

también estar seguros de la total irreversibilidad del proceso revolucionario. Años más tarde las Bases Ideológicas, uno de los documentos centrales de la revolución peruana establecían, al reafirmar el carácter participativo del proceso peruano, que éste Defiende la autonomía de las organizaciones sociales frente a todo intento de control externo a ellas y, consecuentemente, rechaza la propia institucionalización política de la revolución en forma de partido.

Construir el socialismo desde hoy

Fueron muchas las objeciones que surgieron contra estos planteamientos. Se dijo que era utópico e innecesario construir la nueva sociedad desde hoy. Si la revolución era acosada, si los organismos de inteligencia del imperialismo, en coordinación con el Apra y otros elementos de la derecha, actuaban contra el proceso revolucionario, había que organizarse de una buena vez y no dar oídos a los “teóricos” que insistían en tratar de hacer realidad una imagen que correspondía a un futuro lejano pero no a las urgencias del momento. Ahora, había que asegurar el poder. Después, vendría la participación de las organizaciones en el poder consolidado.

Era cierto que la defensa de lo hecho imponía tareas urgentes y que, como todas las revoluciones, la nuestra debía quemar etapas. Pero ello planteaba la acción política directa, sin intermediarios, de las organizaciones, bajo la dirección de sus militantes más lúcidos, aunque no todos sus miembros hubiesen alcanzado un alto grado de madurez política. Eso permitía a las organizaciones jugar un rol de primera línea en defensa de la revolución, a sus dirigentes entrenarse en estas tareas y ganar respaldo de sus bases y, en general, contribuía a hacer aún más fuerte y masivo el proceso social.

En el Perú partíamos de lo que en otras partes del mundo era todavía un objetivo más o menos lejano. Aquí, gran parte de los medios de producción ya estaban en poder del Estado y de los trabajadores. Era posible crear las bases de la nueva sociedad en la conciencia de los hombres sin postergar el cumplimiento de una tarea tan importante y decisiva hacia un futuro indeterminado. ¿Qué razón podía existir para subestimar a las numerosas organizaciones creadas por la revolución y apartar de su seno lo más importante del tema político, encerrándolo en la jurisdicción y el ámbito de los militantes partidarios? ¿Por qué perder todo lo que se había avanzado en la organización y educación de los cuadros populares en vez de incrementar este movimiento volcando la actividad política hacia el interior de las organizaciones? La revolución peruana había proclamado su decisión de edificar una sociedad participativa. Ése era su compromiso con el país. Y las democracias socialistas de carácter participativo no pueden construirse mediante aparatos que no son participativos.

En aquella época seguía muy difundida la creencia en que sólo un estrechamiento



muy fuerte entre los revolucionarios puede servir de espolón para destruir la sociedad antigua y construir una nueva en su lugar. Pero la sociedad nueva siempre se edifica con mucho de la sociedad antigua. Y se edifica sobre todo *con los hombres* de la sociedad antigua. ¿Cuánto del egoísmo, de

la fiera agresividad de la sociedad capitalista, portan los militantes de las organizaciones revolucionarias que deben generar mediante su acción las nuevas sociedades socialistas futuras? No es cuestión de asumir la postura de quién cree que con una pura actitud caritativa y misionera se puede hacer una revolución en sociedades entrecruzadas por una dura lucha individual por la vida. Pero tampoco hay que idealizar y perennizar como virtud aquello que sólo es producto de la inevitable necesidad de la lucha. Dentro de un proceso revolucionario como el peruano era aconsejable y posible educar a las futuras generaciones en la participación, la tolerancia frente a los argumentos del adversario, la convicción de que los revolucionarios de una y otra tendencia no son los únicos portadores de la verdad y por la seguridad en que la revolución no se da siempre homogénea, única, terminada, unilateral, trasmisible desde arriba hacia abajo. Ésta solo puede ser obra de millones de personas que aportan constructivamente sus razones y sus sentimientos. Sumergirse en una corriente masiva, desechando el afán de que la gran corriente entre por un pequeño cauce.

Por el contrario, los militantes de partido absorben el microclima del aparato en que habitan, y que constituye un “ghetto” revolucionario en medio de una sociedad en cambio. En el enclaustramiento florece la convicción en la razón personal, la actitud altanera respecto de los demás, el odio al discrepante, en suma el sectarismo que, a su vez, no tarda en dañar a la revolución presente y afectar las bases de la generación futura. La historia de las revoluciones contemporáneas ya era en aquella época, ilustrativa sobre estos problemas.

Partido y frente único

Las reformas estructurales hicieron asomar a la vida política a miles y miles de pobladores del Perú, que hasta antes del proceso revolucionario no habían estado bajo la influencia de ningún partido político. Ese era un enorme capital que la revolución debía ganar para una tarea de liberación de todo el pueblo. Por tener base económica y hasta jurisdicción territorial, las organizaciones populares creadas por la revolución demostraban

en la práctica a los trabajadores, que ellos tienen intereses comunes. Esto los alejaba de la influencia de las dirigencias partidarias de “clase” media y esfumaba sus diferencias políticas reemplazándolas por la conciencia común de clase, debido a su continuo enfrentamiento con los partidos y con los sectores reaccionarios de la burocracia del Estado.

Hasta 1975 la revolución peruana planteaba un programa político y un modelo de desarrollo que tenían dimensión nacional, y que podían contar con la adhesión de todos las peruanas y peruanos, independientemente de sus orígenes partidarios: bastaba que creyesen en la necesidad de luchar por la liberación de su país. Era a través de la defensa de este programa, que no estaba constituido por declaraciones vacías de contenido sino que iba traducándose todos los días en hechos concretos, que el pueblo del Perú podía llegar a una militancia en los planteamientos ideológicos de la revolución, que explicaban y sustentaban dicho programa desde el punto de vista teórico. Si continuaba avanzando, la revolución podía elevar al pueblo a su toma de conciencia política, mediante una acción antimperialista y antioligárquica demostrable.

Partido y mística

La revolución actuaba desde el poder: la reforma agraria habían sido decidida en el secreto de los comandos militares y los pequeños grupos tecnocráticos y había tomado de sorpresa no sólo a los terratenientes, también a los campesinos. La reforma de las empresas capitalistas también fue decretada desde lo alto, tanto como cada una de las nacionalizaciones, las expropiaciones y casi todas las conquistas económicas y sociales de la revolución. Los peruanos nos acostumbramos a estas medidas y empezamos a verlas como algo natural, que no tenía la emoción de las reivindicaciones que se conquistan luego de una larga lucha desde abajo. Todo esto causaba una suerte de hábito frente a lo novedoso y de indiferencia ante los regalos “caídos del cielo”.

Existió por la revolución y por ciertos hombres del proceso, particularmente los generales Velasco, Rodríguez y Fernández Maldonado, una mezcla de respeto, afecto y expectativa popular. El poder del aparato del estado no es suficiente para explicar por qué la revolución peruana reunió a lo largo de siete años las manifestaciones populares más numerosas de toda nuestra historia republicana ni por qué, cuando el general Velasco fue víctima de un aneurisma fulminante, más de doscientos mil limeños de los barrios populares se movilizaron en horas, en una inmensa manifestación de solidaridad que abarcó 45 cuadras de una de las avenidas más amplias de la capital. Los mítines convocados por la revolución, con notoria ausencia de una clase media que jamás salió a las calles a aplaudir ninguna de sus medidas, contaron con la presencia masiva de lo más característico del pueblo peruano. Todo esto constituía un indiscutible caudal de simpatía popular. Pero la adhesión no era dada gratuitamente. Detrás de cada presencia popular estaba una demanda, de mejores servicios,

de más justicia social, de mayor rapidez en los trámites administrativos. El pueblo peruano no se entregaba ciegamente. Lo del Perú no era una revolución populista, no podía serlo, puesto que el país no atravesaba por una época de prosperidad y era poco lo que podía repartirse a las masas en concesiones inmediatas o reivindicaciones salariales. La revolución repartía la propiedad de los medios de producción a grandes grupos sociales, es decir daba poder y capacidad de decisión, al tiempo que prometía un futuro justo y libre sobre la base del esfuerzo propio. Todo eso a masas que quizás hubiesen preferido un buen gobierno populista que se conformase con otorgar salarios más altos y obligar a los capitalistas a conceder mejores condiciones de trabajo, aunque nadie discutiese el derecho de los latifundistas a ser propietarios de la tierra y de los industriales a ser dueños de las fábricas. El Perú ganaba como país con cada banco nacionalizado, con cada paso adelante en el control estatal del comercio exterior, con cada recurso natural que era rescatado de manos imperiales. Pero esas conquistas no se podían reflejar de inmediato en el nivel de vida popular y aunque el pueblo intuía que la revolución marchaba a su favor, presionaba sobre el gobierno, guiado por su insatisfacción o empujado por sus expectativas. Este desnivel entre las expectativas inmediatas y la batalla que liberaba la revolución por la reconquista de los derechos nacionales en el vértice mismo de la contingencia con el imperialismo no es, sin embargo, una novedad: el fenómeno ha sido vivido por otras revoluciones latinoamericanas y el ejemplo histórico más reciente era el de Allende. El partido podía ser un buen instrumento a ser usado como una red de difusión a través de la cual llegasen explicaciones a las masas sobre lo que estaba aconteciendo, pero no podía solucionar una contradicción que sólo podía ser conducir hacia una entrega total del poder a un pueblo preparado para ello a través de un entrenamiento constante en la adopción de decisiones y no en una política simplemente seguidista del gobierno. La falta de mística sólo podía ser remediada si las masas hacían la revolución y la consideraban como suya. Ningún aparato político, por eficiente que fuese, podía fabricar una mística, un fervor, que es consecuencia de la percepción de lo que cuesta en esfuerzo cada conquista.

Hacia una organización revolucionaria de nuevo tipo

¿Significaba todo esto que había que ser enemigo de toda organización? Sólo quienes estaban interesados en confundir los términos podían argüir que el no al partido era una negativa a cualquier intento o forma de organización popular. Se trataba de cerrarle el paso a la tentación de estructurar un gran aparato burocrático, aislado de los trabajadores de base, precisamente porque se defendía la organización popular. El partido es una de las formas, no la única, de organización política y la revolución debía buscar la forma más adecuada al momento que vivía y a los fines que se había propuesto.

En todo caso, antes que plantearse el problema de la organización política de la revolución había que hacer un gran esfuerzo de organización masiva de las bases populares.

Se trataba de lograr que un conjunto de organizaciones agrupasen en una primera etapa a la mayoría más oprimida de la población peruana que estaba siendo favorecida por las reformas estructurales, para formar cuadros dirigentes. Había que empezar por el principio. Para que cualquier tipo de organización política –incluso el partido si éste hubiese sido recomendable–, jugase un papel realmente influyente había que empezar por la organización del pueblo. No se trataba de construir una organización política apartada de las bases, sino de lograr que las grandes organizaciones del pueblo actuaran políticamente de acuerdo a los intereses históricos de éste coordinando con la dirección revolucionaria del proceso, ejercida por los oficiales progresistas de las fuerzas armadas y a favor de la liberación total del país.

Resulta obvio que los trabajadores más comprometidos con la posición política e ideológica de la revolución no podían actuar dispersos, perdidos en un mar humano y aplicando la mejor orientación política que encontrasen pudiesen. Los militantes de la revolución debían entonces articular su acción, organizarse, pero no debían hacerlo a espaldas de las organizaciones de base. Su primera obligación era trabajar dentro de ellas para generar un gran movimiento popular desde la base, como respuesta a las necesidades inmediatas de defensa, y como planteamiento de largo plazo. Todo ello suponía el surgimiento de una organización política de nuevo tipo, adecuada a las circunstancias que vivía el país y a los objetivos que proclamaba la revolución. Se trataba de hacer una organización, no de generar una nueva burocracia.

Producidas las variaciones en la orientación del gobierno peruano que se sacudieron a todo lo largo de 1976, la cuestión de la organización política revolucionaria volvió a cambiar de faz. Paralizado, detenido o derrotado el proceso, se cerraron las vías constructivas hacia el futuro y el país retornó a la política tradicional a partir de 1980 con el Presidente Belaunde, previo el paréntesis dictatorial de Morales Bermúdez entre 1975 – 1980.

VIII

EL CÓMO Y EL PORQUÉ DE LA CRISIS ECONÓMICA*El mito de la independencia en cómodas cuotas anuales*

Recién llegado al poder, el gobierno de Velasco tuvo que hacer frente a un difícil trance: la administración de Belaúnde había dejado 3 mil 750 millones de soles de déficit presupuestal y 737 millones de dólares en deuda externa, Estados Unidos nos amenazaba con no comprarnos más azúcar y presionaba para que nos cierren los créditos en los organismos financieros internacionales, y no teníamos dinero para pagar las amortizaciones de la deuda. Era necesario refinanciarla, pero los acreedores exigían como condición la entrega de los riquísimos yacimientos de cobre de Cuajone. Promulgada la ley de reforma agraria, en plena expropiación los latifundios costeros en que las empresas norteamericanas tenían un 70% de acciones, y luego de haber hecho esfuerzos para buscar otras fuentes de financiación, el nuevo gobierno no tuvo más remedio que firmar el contrato de Cuajone con una subsidiaria de la American Smelting, causando la sorpresa y el desaliento de los sectores nacionalistas que habían respaldado con entusiasmo la nacionalización de la International Petroleum Company y el inicio de la reforma agraria.

Poco después de la firma del contrato, se estableció que sólo el Estado refinaría y comercializaría el cobre de Cuajone y se inició una política minera nacionalista de grandes alcances. El proceso revolucionario siguió abriéndose paso mediante la continuación de la reforma agraria, la reforma de las empresas capitalistas, las nacionalizaciones del comercio exterior, los bancos más importantes, la industria pesquera, las telecomunicaciones y otras empresas mineras como la Cerro de Pasco Corp. y la Marcona Mining.

Pero el empobrecido Estado que habían dejado los anteriores gobiernos oligárquicos no podía tener la capacidad financiera que se requería para impulsar proyectos que valían millones de dólares y tampoco existía el ahorro interno necesario. La otra posibilidad era la órbita socialista. Pero para los países socialistas, la experiencia peruana era aún muy joven, inmadura y poco confiable desde el punto de vista político, ya que los militares peruanos no perdían ocasión en reiterar su no comunismo. Y además, las urgencias peruanas de capital no podían ser satisfechas en plazos cortos debido a la rigurosa planificación existente en esos países. Por otro lado, el Perú es apenas un pequeño punto perdido en el mapa del mundo y por estar dentro del área de influencia de los Estados Unidos carecía de la prioridad que tenía el Medio Oriente, Asia o Africa, para la Unión Soviética o la República Popular China. Así, prisionero de su propio equilibrio de fuerzas internas y sujeto a los condicionamientos exteriores, el régimen peruano osciló mucho tiempo, casi indefenso, entre los dos grandes polos de poder económico del mundo contemporáneo.

**Producción agropecuaria 1968 – 1975
(promedios anuales durante la reforma agraria)**

- 1968: 11.8 millones TM
- 1971—72: 15.8 millones TM
- 1973—77: 15.5 millones TM
- 1985: 13.5 millones TM
- Producción anual promedio de caña de azúcar 1972—74: 9 millones
 - Amílcar Vargas Gavilano. La revolución de Velasco en cifras. Lima: Ediciones INPET, 1989

Como no se podía perder tiempo, el estado recurrió pronto a los préstamos internacionales, luego de ingeniárselas para expropiar empresas norteamericanas sin romper totalmente con los Estados Unidos. El diseño de la estrategia peruana partió de este criterio: si lográbamos incrementar nuestras exportaciones, particularmente las que proceden de la minería, que con la nacionalización de la Cerro de Pasco Corp. y la intervención del Estado en el comercio exterior ya no estaban en manos privadas sino del país, podíamos endeudarnos con cierta tranquilidad. La producción daría para pagar los préstamos con cierta holgura y aún lograríamos utilidades para seguir financiando nuestro desarrollo. Podíamos usar el endeudamiento invirtiéndolo en bienes de capital para ir acrecentando la potencia del Estado.

En la ausencia de recursos financieros propios, este esquema reposaba sobre el endeudamiento externo. Es como tener la ilusión de comprar independencia por el sistema de ventas a plazos, en cómodas cuotas anuales, Y para respaldar el endeudamiento, recurría a la venta de materias primas, es decir asumía el riesgo de confiar el futuro a bienes económicos que en aquella época iban devaluándose en relación con las maquinarias y tecnología que era inevitable comprar a las potencias industriales cuyos mercados escapan a nuestro control y no están organizados en función de nuestros intereses.

Deuda pública: millones de dólares

- | | |
|---------|--------|
| • 1964: | 250 |
| • 1968: | 737 |
| • 1975: | 3,066 |
| • 1980: | 6,046 |
| • 1984: | 9,755 |
| • 1989: | 14,000 |
- De los 14,000 millones de deuda externa a 1989, el gobierno de 1968—1975 solo es responsable de 2,329 millones.
 - Amílcar Vargas Gavilano. La revolución de Velasco en cifras. Lima: Ediciones INPET, 1989

Por otra parte y aunque el gobierno peruano trató de escapar a la influencia norteamericana buscando fuentes de financiación y mercados de otros países capitalistas y socialistas, esta línea económica no dejaba de tener sus consecuencias políticas. Debíamos mantener relaciones cordiales con los Estados Unidos y los países de su órbita, con las empresas norteamericanas no expropiadas y con el resto de las empresas capitalistas privadas. Este sonriente pragmatismo que en más de una ocasión bordeó la ruptura con el gigante imperial era lo único posible en esos momentos. La sardina se libraba de las fauces del tiburón pero no salía totalmente de su área. La otra posibilidad era reducir al mínimo el consumo nacional, no pagar las deudas ni endeudarse más, enseñarles los dientes a los Estados Unidos y recurrir a la ayuda soviética. Pero el respaldo soviético era improbable y además, de producirse, hubiese traído consigo una influencia ideológica y política y el sacrificio de una autonomía que las fuerzas armadas. En esas condiciones, si la sardina le declaraba la guerra al tiburón, era tragada en un dos por tres.

Y así, obligados por las circunstancias, empezamos a armar una bomba de tiempo que, tarde o temprano, haría explosión. A la deuda de Belaunde empezó a sumarse la de los nuevos proyectos del gobierno revolucionario. Los inestables precios de nuestros productos de exportación empezaron a subir, los acreedores internacionales accedieron a refinanciar las obligaciones de años anteriores y un clima de seguridad, estabilidad y confianza se expandió. A ello se sumó el descubrimiento de petróleo en la Amazonía que hizo pensar a muchos que nuestros bosques nororientales nadan sobre un lago de oro negro. Todo eran inversiones, un futuro próspero e independiente sobre la base de nuevos ministerios, orden, y siempre el anuncio del gran esfuerzo nacional que acaba de iniciarse.

Ésta es una lista apretada e incompleta de los ambiciosos proyectos: grandes irrigaciones como las de Chira-Piura, Majes, La Joya, Olmos y Tinajones para ampliar la frontera agrícola e incrementar la producción de alimentos. Construcción del gigantesco complejo pesquero de Paita para alimentar con pescado de consumo a la población. Explotación de los fosfatos de Bayóvar para fertilizar las tierras agrícolas. Con en mismo objetivo, construcción de la planta de fertilizantes de Talara, como parte de la industria estatal de petroquímica, ejecución de las plantas de negro de humo y solventes en Talara. Exploración y explotación petrolera estatal de la amazonía peruana para autoabastecernos de petróleo. Construcción del oleoducto norperuano para trasladar el petróleo desde la selva, atravesando los Andes, a la costa norte. Ampliación de la siderúrgica de Chimbote como sustento de la industria básica. Construcción de la planta de pulpa blanqueada y de papel periódico de bagazo de caña para autoabastecernos de papel periódico. Construcción de refinерías de mineral en Cajamarquilla e Ilo. Explotación de los yacimientos mineros de Cerro Verde y Michiquillay.

Sumado a las reformas sociales y estructurales, esto resumía el esfuerzo más grande y ambicioso de nuestra historia y el único que tuvo en cuenta los intereses nacionales y populares. Para el pueblo del Perú el cumplimiento de estos proyectos significaba más alimentos, autoabastecimiento de petróleo, energía eléctrica, fertilizantes y papel periódico. Para el Perú como país, era el primer paso hacia el despegue industrial y el nacimiento de una poderosa industria básica. Para el Perú como nación, un grado importante de autonomía frente a las grandes potencias capitalistas.

INCIDENCIA DE LA POBREZA SEGÚN GOBIERNO

PRESIDENCIA	INCIDENCIA DE LA POBREZA AL TÉRMINO DE LA GESTIÓN (%)
Manuel Odría 1948 – 1956	26.6
Manuel Prado Segundo gobierno 1956 – 1962	21.6
Junta Militar 1962 – 1963	21.2
Belaunde primer gobierno 1963 – 1968	20.2
Velasco 1968 – 1975	17.4
Morales Bermúdez 1975 – 1980	27.5
Belaunde segundo gobierno 1980 – 1985	40.2
García primer gobierno 1985 -- 1990	53.9
Fujimori primer gobierno 1990 -- 1995	48.7
Fujimori segundo gobierno 1995 – 2000	52.1
Alberto Paniagua 2000 – 2001	54.3
Toledo 2001 – 2005	48.2

Durante el año 2009, el exdirector del INEI Farid Matuk, publicó en el diario La República de Lima esta tabla en que se aprecia el nivel de pobreza que dejó a irse cada uno de los gobiernos del Perú. Se puede apreciar que mientras Velasco dejó la pobreza en 17.4%, ésta subió hasta más del 52% después de las posteriores administraciones.

Datos elaborados por Farid Matuk, exdirector del Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI y publicados en el diario La República de Lima en 2009 a propósito de un debate sobre la medición de la pobreza en el Perú

Todo lo anterior significaba que el sentido del endeudamiento peruano posterior a 1968 no era el mismo que el de las etapas anteriores, marcadas por las elefantiásicas e intrascendentes obras públicas del dictador Odría, la dilapidación irresponsable del banquero Prado y la sujeción del régimen de Belaúnde a las orientaciones norteamericanas de la Alianza para el Progreso.

Sin embargo, el nivel de las aguas no cesó de subir, hasta que al final alcanzó marcas peligrosas. En 1971 debíamos 997 millones de dólares. En enero de 1972 obtuvimos una nueva refinanciación, esta vez de la deuda de los dos años anteriores. En diciembre de 1973, el nivel seguía subiendo, pero aún había seguridad y optimismo: el general Morales Bermúdez quien, como ministro de economía, manejó las finanzas del país durante el gobierno de Velasco, anunciaba un superávit de 40 millones en la balanza de pagos, un ingreso de 967 millones de dólares por exportaciones y reservas monetarias netas de 564 millones.

Pero treinta días antes, en noviembre de ese mismo año, el mismo ministro Morales Bermúdez había anunciado que la deuda se había incrementado en un 23%, ascendiendo a 3,050 millones de dólares. Dos años después, a fines de 1975 nuestro déficit en la balanza de cuenta corriente con el exterior llegaba a 1,600 millones de dólares y la brecha externa de la balanza de pagos, pese al extraordinario ingreso de créditos e inversión extranjera, alcanzó a 430 millones. No teníamos dinero para pagar nuestras deudas ni para amortizarlas y las bóvedas del Banco Central estaban vacías de dólares. Las divisas y las ilusiones se habían esfumado. O los economistas calcularon mal o hubo factores que escaparon a sus cálculos. Ambas cosas, como veremos más adelante.

Ortodoxia en las finanzas públicas

Mientras el Estado aplicaba una política de transformación de estructuras, en el manejo de las finanzas públicas continuaban imperando los criterios que habían caracterizado las administraciones de los gobiernos oligárquicos. Los ingresos fiscales decrecieron en proporción con el producto bruto interno. En 1968 los ingresos tributarios fueron 14,4% del PBI; en 1973 constituyeron el 12.6 %.

El factor principal para ello fue el poco aumento en el impuesto a la renta, las tradicionales exoneraciones para incrementar la inversión privada que no hicieron sino acentuar una estructura de producción inadecuada para el país. Se ampliaron las fábricas existentes de cerveza y se construyeron dos más, pero no se amplió la capacidad de producción lechera. No se hizo esfuerzos para reestructurar el aparato productivo ni se estimuló una tecnología adecuada para el país. Esta ortodoxa política tributaria tampoco buscó la redistribución del ingreso.

El gasto público fue financiado en gran parte por bonos, con el asentimiento del Fondo Monetario y el Banco Mundial. Pero esos bonos emitidos por el tesoro eran comprados por el propio gobierno. El Banco de la Nación llegó a adquirir de 297 millones en 1970 a 7,200 millones en 1972, un tercio de lo emitido. Todo ello condujo a un exorbitante servicio de la deuda interna – 15% de los ingresos corrientes-- que, sumado al servicio de la deuda externa representaba el 27% de dichos ingresos. Con este expediente, lo único que se logró fue diferir los problemas fiscales de 1971/72 para 1974/75 con un costo económico muy alto, pues se llegó incluso a pagar la deuda emitiendo más bonos: las deudas se pagaron con más deudas.

PBI EN EL PERÍODO 1968 – 1975

- PBI 1968 215'363,000 intis PBI 1975 311'131,000 intis
- Crecimiento porcentual en el período: 44.5% (6.4% anual).

Precios constantes 1970

PBI 1968 4,782 millones de dólares

PBI 1975 9,121 millones de dólares

Crecimiento en el período: 4,339 millones

Amílcar Vargas Gavilano. La revolución de Velasco en cifras. Lima: Ediciones INPET, 1989

La trampa del armamentismo

Durante parte de los primeros tiempos del proceso revolucionario, tuvimos vecinos confiables. Es cierto que la expansionista dictadura brasileña nos amenazaba desde el Este, pero el gobierno chileno era socialista, el boliviano progresista y el ecuatoriano moderadamente nacionalista. Un poco más lejos, mirábamos con simpatía la evolución de nuestros amigos argentinos hacia la izquierda. La historia de esta parte de nuestro subcontinente evolucionaba, a través de sorpresivas y originales experiencias políticas hacia regímenes cada vez menos sumisos a los Estados Unidos y más interesados en un desarrollo económico independiente con justicia social. Una etapa que tuvo sus nombres propios: Allende, Torres, Velasco, Cámpora y Perón.

Pero en 1971, Bánzer depuso al gobierno de Torres en Bolivia. En setiembre de 1973 fue asesinado el Presidente Allende de Chile a quién reemplazó la dictadura de Pinochet. Los dos cambios, realizados como consecuencia de la actividad de la CIA, determinaron una radical variación en la correlación de fuerzas. El Perú había quedado rodeado por gobiernos conservadores.

No pasó mucho tiempo antes de que nuestros vecinos del sur se moviesen en sospechosas intrigas. Mientras la prensa reaccionaria norteamericana denunciaba el supuesto comunismo del régimen peruano, los diarios de Santiago adoptaron una agresividad cada vez mayor. Empezaron los contactos entre Bázner y Pinochet. Luego de muchos años de ruptura y hielo, Bolivia y Chile reanudaron relaciones. El gobierno boliviano pidió al de Chile que concediese una salida al mar. Santiago respondió que sí, en forma de un corredor por el territorio de Arica, que perteneció al Perú antes de la trágica guerra de 1879. Se había creado un clima de tensión entre los tres vecinos en torno a un problema que actualizaba viejas rencillas y removía heridas aún no cerradas. Chile empezó a armarse. Mientras desplegaba su diplomacia, el Perú tuvo que poner al día sus armamentos para equiparar la potencia bélica chilena.

De esta manera, las compras de armamentos se sumaron a los gastos en los grandes proyectos nacionales que el Perú no podía detener so pena de renunciar a su propio despegue económico. Un nuevo peso sobre la balanza de pagos. Y, mientras tanto, los Estados Unidos lograban un doble objetivo: el apoyo al antipopular régimen de Pinochet y la presión indirecta sobre el gobierno peruano para que distraiga su atención hacia la defensa nacional; se había creado condiciones para la debacle económica del régimen peruano.

Dólares para alimentos

La población peruana crecía a un ritmo muy rápido. Si hacía 35 años, en 1940, teníamos siete millones de habitantes, en 1975 éramos más de quince. Pero la despreocupación por el futuro de los regímenes oligárquicos del pasado, hizo que no se pensase con qué alimentar a las nuevas generaciones. Ya en 1960, el Perú tenía que importar productos agrícolas que podría producir en su suelo, de haberse aplicado a tiempo una política previsoras. Pero por el contrario, durante años y años, los latifundistas peruanos se dedicaron a vivir de sus rentas en Lima o Europa, mientras sus campos se erosionaban o rendían cada vez menos, y la organización de la producción agrícola continuó sin responder a las necesidades del país. Sólo pusieron atención en las tierras más accesibles, cercanas al mar y más adecuadas para cultivos de exportación como el algodón y el azúcar, que significaban dólares para los exportadores pero no sustento para el pueblo. Teniendo en cuenta este hecho, la reforma agraria no fue solamente un acto de justicia para con una población campesina que había sido explotada durante generaciones, sino también un paso previo e imprescindible para cualquier planeamiento de la producción futura de alimentos en el Perú.

Pero era mucho el tiempo que se había perdido. El Perú debió importar cantidades cada vez más grandes de carne, trigo, leche, arroz, etc, a diversos países del mundo entre ellos los Estados Unidos. Compramos carne de Guatemala, Nueva Zelanda, Costa Rica y

Argentina. Arroz al Ecuador. Trigo a los Estados Unidos, Canadá y Argentina. Elementos para hacer leche reconstituida, a Holanda. Cada vez producíamos un porcentaje menor de lo que consumimos y pagábamos un tributo cada vez más alto a las grandes potencias por alimentos.

Si las familias peruanas hubiesen pagado lo que valen realmente en su cotización internacional, los alimentos se habrían convertido hacia tiempo en artículos de lujo en el Perú, sobre todo a partir de 1973, cuando los países productores de trigo decidieron aumentar el precio del cereal en un 200 por ciento. En la esperanza de solucionar la crítica situación a mediano plazo y consciente de que poner los alimentos importados a su precio real en el mercado interno le hubiera significado una ola de protestas populares que podía haber sido utilizada por sus enemigos para intentar derrocarlo, el gobierno revolucionario optó por la política de control y subsidios a los precios. Durante varios años el Estado subsidió parte importante de los alimentos e impidió un alza mayor del costo de vida. En 1975, el Estado pagaba casi la tercera parte del valor de cada kilo de arroz, y de trigo, casi la mitad del kilo de harina, la tercera parte de cada pan y cada botella de aceite doméstico. Durante varios años, el pueblo disfrutó de un costo de vida artificialmente bajo en relación con el de otros países de América Latina, cuyos gobiernos no titubearon en descargar el peso de la inflación sobre sus respectivos pueblos.

Pero el control de precios obligaba a las empresas campesinas a seguir vendiendo sus productos a niveles más bajos que sus costos de producción. Las jóvenes empresas campesinas no sólo tenían que hacer frente a complejos problemas de producción, sino que también resultaban subsidiando el costo de vida de la población urbana. A pesar de éste y otros muchos factores en contra – como la descapitalización de los fundos causada por los terratenientes que se retiraron de muchas haciendas llevándose cosechas, ganado, maquinarias y equipo – los campesinos peruanos mantuvieron los niveles de producción anteriores e incluso los incrementaron en varios renglones. Pero la ausencia de resultados más espectaculares –imposibles en una reforma agraria que recién se iniciaba--, era atribuida fácilmente a falta de mística o de capacitación. El problema era mucho más complejo. Se debía a que en sus primeros años el proceso revolucionario desalojó a los patrones, pero mantuvo a los campesinos en condición de tributarios de la ciudad.

Por otro lado, era casi imposible atacar con firmeza la especulación con los alimentos, que, a pesar de los controles estatales, llegaban de todas maneras a precios altos a los mercados urbanos, por la actividad especulativa de miles de intermediarios que pululaban entre los polos de producción y consumo. Transformar una intrincada red de comercialización capitalista interna era difícil. El Estado añadió un nuevo intermediario: EPSA, la empresa pública de comercialización de alimentos, que no alteró, en lo sustancial la relación comercial

desfavorable a los campesinos. Había insatisfacción y desagrado, tanto entre los productores agrarios como entre los consumidores urbanos.

Además la ineficiencia e inexperiencia de los funcionarios del Estado, causó más de un estropicio. Hubo cosechas que recién eran financiadas cuando ya estaban perdidas, consejos inadecuados para cultivos que después no tenían salida, créditos demorados durante largos meses hasta que eran inútiles, importaciones excesivas de productos que había en el país, con lo que el Estado arruinaba a quienes él mismo estaba habilitando con una financiación lenta y una ayuda técnica defectuosa. La indignación de los campesinos aumentaba hasta el punto de que algunos grupos llegaban a añorar incluso los tiempos de la explotación de los patrones que era más inhumana pero menos complicada y más fácil de entender. El rechazo a las complejidades y misterios del nuevo sistema los llevó a afianzar en muchos casos una actitud más bien conservadora.

De todos modos, en la ciudad el pueblo tenía pocos y caros alimentos, mientras los grupos sociales medios y altos podían pagarlos sin mayores problemas y continuaban manteniéndose como los primeros consumidores de carnes, legumbres y frutas en el país. Para el pueblo sólo quedaban los alimentos de menor valor nutritivo y aún así, a precios que eran bajos en comparación con otros países pero que, de todos modos, estaban por encima del poder adquisitivo popular.

A fines de 1975, los subsidios ascendían a una cifra que excedía lo tolerable. Además de endeudarse para sus grandes proyectos de inversión y de comprar armas para la necesaria defensa nacional contra sus enemigos, el Perú necesitó más y más dólares para comprar lo que debería producirse dentro del país.

Más dólares para una industria artificial

El Estado peruano pagó para proteger a los consumidores en el mercado interno, pero no intervino en las compras de los importadores privados, comerciantes e industriales. Desde que se implantó el control de cambios, era el Estado quien distribuía los dólares con que los importadores hacían sus compras en el exterior. Éste era, sin embargo, un control ilusorio, porque en posesión de los dólares que les correspondían en su cuota, cada importador compraba afuera lo que más convenía a sus negocios o intereses personales, independientemente de los intereses del país. Además resultaba muy difícil conocer la veracidad de los precios y la calidad de los productos. Un resquicio que las subsidiarias de las firmas imperialistas convirtieron en boquete cuando recurrieron al ardid de la sobrefacturación, por el cual la central extranjera cotiza artificialmente altos los precios de los artículos que envía a su filial peruana. Ésta recurre al Estado para pedir más dólares, que envía a su casa matriz.

La filial tiene más dólares para especular y la central disfruta de una sobre utilidad. Ambas respetan aparentemente el control del Estado, pero lo burlan con ventaja. Mientras tanto, el Perú no podía contrarrestar sus crecientes gastos de importaciones esenciales por el ahorro correspondiente en importaciones no esenciales o suntuarias.

Una verdadera industria nacional es la que, estando en manos del país, produce artículos manufacturados que satisfacen las necesidades de la población empezando por las más urgentes y utilizando en primer lugar las materias primas que el país produce. De esta manera, el ciclo económico de la producción empieza por usar nuestros recursos básicos, evitando en la medida de lo posible cualquier dependencia del exterior y se dirige, no a satisfacer las necesidades artificiales generadas por el consumismo capitalista sino las elementales de habitación, alimentación y vestido, dejando para después las que no son urgentes y esenciales, porque un país en guerra contra la desnutrición y la miseria no puede darse el lujo de perder tiempo ni dinero.

Pero dominado casi total y monopólicamente por el imperialismo, el pequeño sector industrial privado de la economía peruana constituía el extremo opuesto a lo descrito. Muchas industrias manufactureras pertenecían a las transnacionales y funcionaban cumpliendo una pequeña parte del proceso industrial que se preparaba y desarrollaba desde el exterior. Por otro lado en muchos casos producían artículos que no eran esenciales para los peruanos, pero que podía pagar la minoría de alto poder adquisitivo. Nuestro pueblo estaba mal alimentado y mal vestido, pero fabricábamos ropa elegante, y teníamos uno de los primeros puestos en ensamblaje de autos en América Latina. Despilfarramos dinero en tecnologías inadecuadas que no contribuían a la solución de nuestros problemas más agudos. Teníamos una industria que producía sólo para la minoría de mayores ingresos no una producción masiva que abarate los costos de bienes fundamentales.

Este tipo de industria, heredada de los gobiernos oligárquicos que preconizaban un remedo de industrialización, usaba en proporción creciente, materias primas e insumos comprados en el exterior. Cada día era la mayor la cantidad de fibras sintéticas, productos químicos y toda clase de insumos que el Perú debía importar para alimentar a su artificial industria sin hablar de las partes que ya venían fabricadas y listas para el proceso de montaje que culminaría con la colocación de la etiqueta “made in Perú”.

De esta manera los dólares que logramos en el exterior mediante la difícil venta de nuestras materias primas en proceso de devaluación, los despilfarramos en tecnología innecesaria y bienes no esenciales. Y esos dólares pesaban cada vez más sobre nuestra balanza comercial y de pagos, aunándose a los factores de la crisis.

Pero la verdad es que una planificación a fondo de la producción industrial, que tuviese en cuenta las necesidades de la población peruana para romper con la dependencia de las transnacionales, constituía un paso que la revolución no podía arriesgar sin haberse asegurado antes otros pasos importantes: el monopolio del comercio exterior, la generación de una industria básica adecuada, el control de las fuentes de financiamiento interno, etc. Y además, lo que no era menos importante: un respaldo político decidido de la población urbana de menores ingresos que sirviera de balance a la reacción de la clase media, formada en hábitos de consumo extraños a la realidad del país que hubiera reaccionado en contra de cualquier alteración de su modo de vida “occidental y cristiano”.

La revolución no se atrevió a sobrepasar esta frontera porque habría afectado la propia forma de vida de los cuadros militares que eran su origen y apoyo principal. La misma razón por la que tampoco afectó las estructuras de la propiedad urbana, la privó de tener una poderosa base social en la ciudad como sí la tenía en el campo. Durante varios años y a pesar de las difíciles y delicadas condiciones económicas en que se movía, el Perú pagó el alto costo que significaba continuar manteniendo el nivel de vida, los hábitos de consumo y el despilfarro creciente de una clase media de altos ingresos que la revolución no llegó a tocar. Pero al hacerlo, se detenía voluntariamente en el umbral de una transformación más radical, profunda, integral y popular, en el momento de tocar a las puertas de una revolución socialista.

Las desagradables sorpresas del petróleo y la harina de pescado

Los testaferros peruanos y las compañías extranjeras que se habían enriquecido en pocos años convirtiendo en harina la anchoveta, el pequeño pez rico en proteínas para alimentar el ganado europeo, estaban lejos de imaginarse que los militares serían capaces de nacionalizar todas sus industrias. Los militares lo hicieron ganando para el país el que hasta entonces era su primer renglón de exportación. Vino el bloqueo, las mafias internacionales se movieron con presteza para que nadie comprase la harina peruana, y el Perú superó a medias las dificultades después de algunos meses vendiendo directamente al mercado socialista. Pero por efectos de la depredación sin control, del saqueo de años o como consecuencia de variaciones climáticas, la anchoveta desapareció de los mares peruanos. Nos quedamos sin los dos millones de toneladas que exportábamos anualmente, sin los 300 millones de dólares que eso significaba, con una industria casi arruinada y un grave problema social.

La nueva capacidad económica que iba asumiendo el Estado permitió ir capeando el temporal. Pero en 1973, la decisión de los países exportadores de subir el precio del petróleo desencadenó una cadena de alzas que agravó la ya insostenible inflación internacional. Los combustibles, los plásticos, los fertilizantes, toda la línea de productos petroquímicos que

son usados como insumos para la industria ligera de consumo, experimentaron a su vez crecientes alzas que no estaban previstas en los planes del Estado, hicieron trizas los cálculos de costos y generaron una explosiva presión sobre la economía.

Mientras en otros países de América Latina, los gobiernos no se hacían mayores problemas y se limitaban a dejarse llevar por la ola de la inflación, en el Perú, el Estado operó de parapeto una vez más tratando de cubrir con un mínimo racionamiento que en la práctica no fue eficiente y con fuertes subsidios, las consecuencias de la crisis, para reducir su impacto sobre la población. Desde enero de 1974 mantuvo un precio del petróleo y la gasolina que estaba por debajo de lo que el mismo Estado pagaba al comprarlo de los países proveedores. Para evitar nuevas alzas de los alimentos, el racionamiento de la gasolina fue moderado y se mantuvo inalterable el precio del petróleo para transporte pesado. Pero era un nuevo peso sobre un Estado ya agobiado por enormes dificultades.

Los Estados Unidos con la sartén por el mango

En esta situación, cuando el Perú decidió nacionalizar los yacimientos de hierro de Marcona, que detentaban ilegalmente la Marcona Mining Corp, vino un nuevo bloqueo, esta vez contra el hierro peruano que era vendido al Japón. La negativa de los compradores japoneses presionados por la Marcona Corp. fue un duro golpe contra la economía peruana, ya afectada por los factores descritos. Las consecuencias: al finalizar 1975 nuestra deuda externa sobrepasaba los 3 mil millones de dólares, teníamos un saldo en contra de mil 600 millones en la cuenta corriente de la balanza de pagos y un déficit presupuestal de 81 mil millones de soles previsto para el bienio

1975-76. Para el imperialismo, había llegado la hora de cobrarle todas las cuentas a una revolución aislada y desfinanciada. Esta situación crucial coincidió con el golpe de estado del general Francisco Morales Bermúdez contra el presidente Velasco y sirvió de telón de fondo para una sustitución en el poder, de la mayor parte de cuadros militares que tenían ideas revolucionarias, por otros de mentalidad conservadora.

El Fondo Monetario Internacional estuvo siempre detrás de las medidas económicas librecambistas más reaccionarias y antipopulares en América Latina. Para el FMI y los acreedores del Perú, las cosas eran muy simples. Si el Perú estaba gastando más dólares de los que tenía y si debía más de lo que producía, era necesario devaluar su moneda y dar garantía y confianza de que pagará. Aunque la devaluación, las garantías y la confianza signifiquen que, en el término de horas, los peruanos vean reducidos sus salarios a la mitad.

Pero el hilo de tal razonamiento no terminaba ahí. Si se necesita dólares hay que traerlos de afuera, en forma de inversiones extranjeras, aunque éstas agraven la dependencia

que es la causa final de nuestra crisis. Si se necesita mayor producción, hay que estimular las inversiones, aunque éstas sean capitalistas, ahoguen las posibilidades de un cambio social, agraven la explotación y la injusticia. Lo que interesa es que haya dólares en el mercado y dinero para pagar a los acreedores. Renunciar a los proyectos de transformación social, no tocar nuevas empresas norteamericanas, no hacer nuevas nacionalizaciones, no alarmar a los inversionistas, alentar a la empresa privada, congelar las reclamaciones salariales mediante una política dura con los sindicatos, someterse a las condiciones impuestas por los sectores empresariales, fueron las reglas que cambiaron la orientación del proceso peruano. Entre la confianza de los capitalistas o la confianza del pueblo, se eligió la confianza de los capitalistas, en la urgencia de salvar la situación a como dé lugar.

REVISTA

Imaginando el Perú post pandemia

Ediciones Grupo Emancipador Perú